

# **Entre el centralismo y la (ausencia) de crítica: discutiendo en breve dos tensiones que atraviesan las ciencias sociales peruanas**

Pável Aguilar Dueñas

ORCID: 0000-0002-6355-1905  
Pontificia Universidad Católica del Perú  
paguilar@pucp.edu.pe  
Recibido: 11 de junio de 2024  
Aceptado: 27 de julio de 2024

## **Resumen**

Este ensayo intenta abordar dos tensiones que hoy atraviesan las ciencias sociales peruanas: (i) la persistencia de dinámicas centralistas en la producción de conocimiento académico y (ii) el predominio de un talante punitivista en el análisis social de cuestiones que —por su complejidad y carga moral— requieren de enfoques matizados. En un país marcado por profundas desigualdades territoriales e institucionales, se sostiene que las ciencias sociales aún hoy reproducen una lógica centro-periferia que limita el desarrollo disciplinario de las regiones. Mientras que en Lima se han consolidado centros de investigación de alcance global, en la mayoría de universidades regionales, la investigación continúa siendo una práctica individual, precarizada y desarticulada, en gran parte por factores internos como el patrimonialismo universitario y la ausencia de voluntad institucional. A la par, se propone una crítica a las perspectivas punitivistas que abordan fenómenos como la violencia o la informalidad sin considerar

sus factores estructurales. Usando como ejemplo el caso de la minería artesanal, se argumenta que estas miradas reducen los conflictos a narrativas moralistas centradas en la búsqueda de culpables, ignorando procesos históricos, desigualdades de poder y luchas autonómicas. El ensayo no pretende ofrecer respuestas concluyentes, sino abrir preguntas y esbozar hipótesis que contribuyan a repensar algunas dimensiones de las ciencias sociales peruanas contemporáneas.

**Palabras clave:** centralismo, punitivismo, clientelismo, minería artesanal.

### **Abstract**

This essay seeks to explore two tensions currently running through Peruvian social sciences: (i) the persistence of centralist dynamics in the production of academic knowledge, and (ii) the dominance of a punitive tone in the social analysis of issues that —due to their complexity and moral weight— demand more nuanced approaches. In a country marked by deep territorial and institutional inequalities, the argument here is that social sciences still reproduce a center-periphery logic that stifles the disciplinary development of the regions. While research centers with global reach have taken root in Lima, in most regional universities, research remains a fragmented, underfunded, and largely individual effort. This is mainly the result of internal factors like university patrimonialism and a lack of institutional commitment to research. At the same time, the essay puts forward a critique of punitive perspectives that address phenomena like violence or informality without accounting for their structural roots. Using the case of artisanal mining as an example, it argues that such perspectives tend to reduce conflict to moralistic narratives focused on blame, overlooking historical processes, power asymmetries, and struggles for autonomy. This essay does not aim to offer definitive answers, but rather to raise questions and sketch out some hypotheses that may help us rethink certain aspects of contemporary Peruvian social sciences.

**Key words:** centralism, moralism, patronage politics, artisanal mining.

En el Perú, las ciencias sociales han sido regularmente un campo de disputa política. Desde controversias como la evaluación crítica del informe de Uchuraccay hasta la crítica del andinismo formulada por Orin Starn (entre muchos otros)<sup>1</sup>, las tensiones conceptuales y de perspectivas constituyen contradicciones fértiles para el debate y la evolución dinámica de la forma en la que se intenta producir conocimiento en un

---

1 Véase Ansión (1992), Reátegui *et al.* (2008) y Degregori (2013).

país tan abismalmente desigual. En este breve ensayo, evaluaremos dos tensiones estructurales que atraviesan los debates en las ciencias sociales peruanas actuales: (i) la tensión entre centralismo y descentralización y (ii) una suerte de punitivismo —por no encontrar un nombre mejor— al cual se intenta responder desde una estrategia de politización de los *problemas sociales*.

Este artículo no pretende ser exhaustivo, sino, más bien, un intento de mostrar a la luz pública algunas preocupaciones que desbordan el claustro académico y que interpelan las fronteras entre la vida y la escritura de quienes tratan de interpretar al Perú.

## I. Del centralismo en la academia peruana

Actualmente, el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú evidencia una marcada disparidad entre las dinámicas de profesionalización, producción académica y debate intelectual concentradas en Lima, la capital y espacio central, y las que se desarrollan en el resto del país.

En la ciudad de Lima, se aprecia una academia más o menos institucionalizada, y un circuito académico compuesto por nodos que son la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y, en menor medida, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad del Pacífico (UP). En los últimos años, han aparecido, además, otros nodos que se están incorporando como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y otros centros académicos en temas más específicos como los estudios urbanos<sup>2</sup>, la historia económica<sup>3</sup>, investigación educativa<sup>4</sup>, etc. En los casos de la PUCP y de la UP, tienen centros de investigación con fondos y capacidad para atraer talentos y financiadores, mientras que otros importantes espacios de investigación y divulgación como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) cuentan con el respaldo financiero de entidades del alcance de la Fundación Ford, la fundación Gordon & Betty Moore, entre otras. Lo mismo ocurre con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), un importante espacio de investigación y consultoría también involucrado en redes de financiamiento internacional que le han permitido posicionar sus líneas de investigación y constituir un *staff* de investigadores ciertamente destacado. Algo similar a lo que acontece en la PUCP, que en su condición de universidad privada y de tradición humanista, ha logrado construir un aparato de investigación internacionalmente competitivo, y en bastante menor medida, también en la UNMSM, donde a pesar de los problemas estructurales

---

2 Véase Urbes Lab (<https://www.urbeslab.com/>).

3 Véase la Asociación Peruana de Historia Económica (APHE) (<https://www.laaphe.org/>).

4 Véase la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP) (<https://www.siep.org.pe/>).

de la universidad pública, aún hay espacios de investigación que participan de debates nacionales e internacionales.<sup>5</sup>

En cambio, en las regiones, lamentablemente, no se identifica el desarrollo de un circuito académico basado en líneas de investigación que sea capaz de construir un puente entre academia y las agendas regionales o nacionales (mucho menos que participe de espacios y debates internacionales). En el pasado, algunas universidades habían asumido un rol protagónico como la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) o la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH); sin embargo, este rol se ha debilitado en las últimas décadas a efectos de la desinstitucionalización académica y de la crisis que en general enfrenta la universidad pública desde los años noventa<sup>6</sup>. De hecho, algunos centros regionales de estudio que anteriormente se veían como promesas para el desarrollo de unas ciencias sociales descentralizadas, como es el caso del Centro Bartolomé de las Casas en Cusco o el CIPCA<sup>7</sup> en Piura —entre otras iniciativas regionales—, no solo han perdido visibilidad en los últimos años, sino que el ritmo de su producción científica ha decaído considerablemente. Este debilitamiento de los centros de investigación regionales también se ha hecho sentir con la pérdida de espacios críticos en los circuitos académicos y en la desconexión que hoy experimentan las audiencias locales y nacionales respecto de los análisis territorialmente situados que otrora producían estos centros.

Esta situación resulta particularmente preocupante si consideramos que las regiones no cuentan con la misma capacidad para atraer inversión ni capital humano como ocurre en Lima. Esta disparidad refuerza una dinámica hipercentralizada y profundamente desigual que impacta negativamente no solo en el desarrollo económico y social de las regiones, sino también en el fortalecimiento de los circuitos académicos de las ciencias sociales y en la consolidación de una sociedad civil activa y crítica fuera de la capital<sup>8</sup>.

---

5 A propósito de la UNMSM, llama la atención por ejemplo el importante posicionamiento que su fondo editorial ha tenido en los últimos años con importantes publicaciones relativas a las ciencias sociales y también el Centro de Documentación del Perú Contemporáneo (CEDOC) que también en los últimos años ha digitalizado un impresionante acervo documentario a disposición de cualquier investigador en cualquier parte del mundo (véase: <https://cedoc.sisbib.unmsm.edu.pe/>).

6 Una década marcada, además, por la violencia política, las políticas de ajuste estructural y el desmantelamiento de la universidad pública a efectos de una política represiva por parte del gobierno autoritario de Fujimori.

7 Centro de investigación y promoción del campesinado.

8 Una muestra elocuente de lo que acabo de señalar es la publicación, en el año 2022, del informe *Las ciencias sociales en el Perú y la sociedad del siglo XXI. Demanda formativa y agenda de investigación*, editado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC). En dicho informe, 41 académicos y académicas de las ciencias sociales reflexionan en torno a 13 ejes temáticos que abarcan desde el lugar de las ciencias sociales en el mundo actual, hasta el impacto de la pandemia en la sociedad y las principales agendas de investigación de cara a lo que resta del siglo XXI. Como podrá intuir el lector o la lectora, ninguno de los especialistas convocados

En Lima, académicos peruanos y extranjeros de la década de los 1960 y 1970 dejaron un importante legado en las ciencias sociales, no solo contribuyendo al fortalecimiento de las facultades universitarias, sino también en la constitución de centros de investigación con enlaces de financiamiento e intercambio globales. En esa época, aparecen preocupaciones que luego se posicionarían como debates clásicos como lo fueron los estudios sobre marginalidad, urbanización, migraciones, cambio cultural, entre varios otros. Estas generaciones supieron construir y prolongar sus “escuelas”, algo que no tuvo mayor continuidad en regiones como Cusco, en donde a pesar del desarrollo académico entre las décadas de los 70 y 90 parece que el circuito local de las ciencias sociales se encuentra muy debilitado. También es el caso de la UNSCH que en los 80 y 90 albergó a importantes intelectuales nacionales y extranjeros y que, a pesar del recrudecimiento de la violencia política, produjeron importantes debates que impactaron la universidad y el espacio público<sup>9</sup>. También es justo decir que en dichos espacios algunos investigadores individuales intentan, aun con todos los problemas estructurales e institucionales en contra, producir trabajo intelectual lidiando con el autofinanciamiento, la ausencia de interlocutores en sus facultades o regiones, las dificultades para participar de seminarios y congresos nacionales o internacionales, y también con la exclusión de sus pares o colegas que más bien los observan como potenciales amenazas a sus respectivos *statu quo*.

También hay que mencionar que en estas regiones la agenda política universitaria tiene mayor capacidad de influencia que la agenda académica y que esto, de muchas maneras, ha moldeado un conjunto de dinámicas que debilitan la capacidad de investigar, publicar y participar en espacios de discusión académica relevante. Un factor asociado a este problema, y del cual se discute poco, es el poder que ciertas autoridades universitarias —junto con sus círculos de influencia locales— ejercen al interior de las universidades. Este poder suele orientarse más a garantizar la permanencia de su control político e ideológico que al desarrollo académico institucional<sup>10</sup>. En este contexto, se forjan relaciones de clientelismo que no solo dificultan la atracción de talentos foráneos, sino que transforman la vida académica en un circuito endogámico e improductivo. Como resultado, muchas universidades públicas regionales se convierten en espacios donde profesores sin vocación académica encuentran un lugar seguro para mantenerse laboralmente, lo

---

proviene de universidades regionales o tiene una trayectoria vinculada institucionalmente a ellas. Véase Manrique (2022).

- 9 Algo muy similar podría decirse de otras ciudades como Trujillo y Huancayo, cuyas facultades de Ciencias Sociales cuentan más de medio siglo, pero que parecen no participar de circuitos nacionales e internacionales de investigación, salvo ciertas excepciones muy individuales.
- 10 De esto ya daban cuenta Degregori y Sandoval (2009) cuando reflexionaron sobre la crisis de la antropología peruana. Estos autores encontraron que no era el neoliberalismo el que había debilitado a la universidad pública y a la disciplina, sino más bien dinámicas institucionales bastante recientes como las que venimos comentando en este ensayo.

que contribuye al estancamiento de la vida intelectual regional y, por extensión, a una merma en el dinamismo académico a nivel nacional<sup>11</sup>.

Una muestra de estos contrastes son las publicaciones, tanto a nivel de libros como de *papers* académicos: las publicaciones del IEP, GRADE, la PUCP y UNMSM gozan de amplia difusión e impactan en los exiguos circuitos académicos y editoriales peruanos que constituyen una suerte de canon académico.<sup>12 13</sup> En paralelo, hay que agregar que los artículos en revistas académicas de los referentes intelectuales nacionales están escritos en inglés y para un público foráneo, y en cierto sentido no dialogan con estudiantes e intelectuales locales —y qué decir del amplio público. Y aunque esta situación puede resultar comprensible si se toma en cuenta las reglas de juego predominantes en la academia, lo cierto es que estas dinámicas evidencian una preocupante ausencia de interlocutores y, aún más, la falta de esfuerzos regionales sostenidos para construir contrapesos al centralismo como sí los hay en otros países de Latinoamérica<sup>14</sup>.

Por ejemplo, en la Argentina, la Universidad de Buenos Aires es ciertamente importante, pero existen al menos otras siete u ocho universidades descentralizadas de calidad internacional y con agendas de investigación propias. Lo mismo podría decirse de países como México, Chile y Brasil —y quizá en menor medida de Colombia— donde existen esfuerzos concretos por descentralizar la producción académica y construir polos regionales de pensamiento. En el Perú, sin embargo, esto resulta sencillamente impensable bajo las condiciones actuales. La centralización académica también se explica, en parte, por el perfil del estudiante de ciencias sociales y sus expectativas formativas y laborales. Siendo realistas, en no pocos casos, la decisión de formarse en estas especialidades está motivada por la expectativa de culminar un programa académico relativamente poco riguroso, así como por el deseo de acceder rápidamente a una salida laboral en programas sociales o intervenciones promovidas por el Estado. Esta lógica utilitaria no solo debilita el compromiso con la formación crítica, sino que también limita

---

11 Si bien este fenómeno también se presenta en la ciudad de Lima, el contraste entre *centro* y *periferia* hace que, en las universidades regionales, sus manifestaciones sean más pronunciadas y sus efectos, potencialmente más nocivos para el desarrollo académico y profesional.

12 Lo mismo podría decirse de sus ecosistemas conjuntos como el SEPIA, la *Revista Peruana de Investigación Educativa*, entre otros.

13 Podrían ser tres las excepciones: (i) la *Revista Peruana de Antropología* vinculada a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, (ii) el Fondo Editorial de la Universidad Nacional del Altiplano que en los últimos años ha apostado con entusiasmo por las Ciencias Sociales y (iii) la editorial Lliu Yawar de Huancayo, con una innovadora apuesta por publicar investigaciones de calidad a nivel regional y nacional.

14 Habrá quienes pregunten ¿de quién es la culpa?, ¿de los que detentan las posiciones centrales en el tablero académico?, ¿de quienes estando en posiciones de poder en las instituciones de educación superior regionales pierden una tras otra cualquier oportunidad de mejora?, ¿acaso la culpa es de los estudiantes? Más que buscar culpables me interesa dar cuenta del panorama, al menos como un primer esfuerzo.

el desarrollo de comunidades académicas comprometidas con la producción de conocimiento situada y transformadora.<sup>15 16</sup>

En consecuencia, es bastante difícil —aunque no imposible— encontrar en las regiones la figura del profesor investigador o de la profesora investigadora. En general, la dinámica educativa generalizada es bastante simple de describir: la mayoría de docentes nombrados por concurso solo dictan su cátedra y no están interesados en conducir investigaciones orientadas a publicar los resultados o participar de un debate que exceda su carga horaria. En los últimos años, sin embargo, a efectos de la necesidad de incorporar al Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), muchos docentes de universidades públicas y privadas han sido partícipes de prácticas poco éticas con el fin de acumular publicaciones en revistas indexadas. Basta con cotejar algunos nombres con sus respectivos registros en el CONCYTEC, para observar que en los últimos años sus publicaciones se han multiplicado geoméricamente y que estas han sido publicadas en las llamadas “revistas predatoras” como lo han atestiguado algunos portales como Científicos.pe<sup>17</sup>.

Todo lo antes descrito tiene consecuencias en el tipo de profesionales de las ciencias sociales que nuestras universidades regionales producen: estudiantes con problemas formativos (y, en el mejor de los casos, obligados a ser autodidactas), desconectados y desconectadas de los debates globales y enfrentados —no sin bastante “creación heroica”— a situaciones de marcada desigualdad, respecto de sus pares limeños, frente a oportunidades laborales y educativas a nivel de posgrado<sup>18</sup>.

Por otro lado, también pierde significativamente el aparato público y la ciudadanía en su conjunto, ya que se espera que los profesionales y las profesionales de las ciencias sociales se involucren en procesos de fortalecimiento del Estado o que se desempeñen como burócratas eficientes. Sin embargo, en la práctica, el tránsito hacia el servicio público revela profundas desigualdades: en los procesos de selección y evaluación de competencias, los potenciales servidores públicos

---

15 De hecho, la demanda de profesionales de las ciencias sociales —al menos desde mi percepción— se hace visible desde el gobierno de Ollanta Humala, ya que previo a este las convocatorias públicas y privadas no tenían mucha claridad (e interés) respecto del perfil del profesional de ciencias sociales. Esto generaba, más bien, una competencia creciente en el mercado laboral entre los egresados de las ciencias sociales y profesionales de otras disciplinas como el derecho, la educación o la salud.

16 Véase, por ejemplo, *Antropología y antropólogos en el Perú. La comunidad académica de ciencias sociales bajo la modernización neoliberal* de Degregori y Sandoval (2008) y *Nosotros los sociólogos. Legados, perspectivas y desafíos de la sociología en San Marcos* de Huaytalla, Romero y Vargas [Editores] (2013).

17 Véase al respecto el reciente artículo de Percy Mayta: <https://larepublica.pe/opinion/2025/02/16/el-uso-de-revistas-depredadoras-por-percy-maytatristan-hnews-742400>.

18 Pensemos por un momento en el proceso de aplicar a una beca de posgrado. En la mayoría de los casos, las universidades competitivas solicitan cartas de recomendación, ¿qué carta va a tener un mayor peso?, ¿la de un docente atrapado en su zona de confort improductivo o la de un docente investigador?

provenientes de regiones enfrentan claras desventajas frente a sus pares de la capital. Las consecuencias de este piso estructuralmente desnivelado trascienden el ámbito universitario y el pequeño mundo de la academia de las ciencias sociales. Su impacto es mucho más amplio, afectando de forma directa u oblicua la calidad de nuestras instituciones, la equidad territorial y, en última instancia, nuestra vida cotidiana como ciudadanos y ciudadanas.

Me pregunto si Arequipa podría ser una excepción. En la última década, han florecido en esta ciudad, junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Agustín (UNSA), nuevos espacios formativos en las especialidades de Ciencia Política e Historia por parte de dos universidades privadas: la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y la Universidad Católica Santa María (UCSM). Y en ambos espacios habría un ímpetu por conformar cuerpos docentes con vocación de investigación, a pesar de que estas especialidades no pertenecen precisamente al sector de alta o media demanda educativa superior. ¿Tendrá esto que ver con su carácter de universidades privadas o con su proximidad a la Iglesia católica? —abro la pregunta.

También aparecieron, en los últimos años, las escuelas de Antropología en la joven Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) de Amazonas y de Historia en la Universidad Nacional Jorge Basadre (UNJB) de Tacna. Se trata de un hecho que invita al optimismo, pero que también exige cautela ante la posibilidad de que estos jóvenes espacios universitarios reproduzcan —o incluso se vean contagiados— por los vicios ya enquistados en sus contrapartes más antiguas.

Otra preocupación apunta a la limitada presencia de las universidades públicas en los debates sobre los asuntos políticos, sociales y culturales de nuestro tiempo, los cuales, evidentemente, trascienden el ámbito estrictamente académico. Nos quedan muy pocos “intelectuales públicos” y, aunque algunos podrían aducir que los *influencers* y las *influencers* de las ciencias sociales han venido a ocupar ese vacío, lo cierto es que, más allá de funcionar como una suerte de “animadores culturales”, su lugar de enunciación y el alcance de sus discursos tienden también a reproducir muchas de las desigualdades y sesgos académicos que hemos venido señalando. Sucede que, con el debilitamiento acelerado de la democracia, la ciudadanía sufre por la ausencia de espacios de intercambio de argumentos respecto al modelo económico, las distancias que la desigualdad ha producido en las últimas décadas y también por la ausencia de alternativas frente al autoritarismo galopante. Necesitamos entonces voces informadas y, al mismo tiempo, críticas para delinear respuestas públicas y populares frente al avance de las políticas neoliberales y/o antidemocráticas. ¿En cuántos de esos debates —si es que estos existen— participan los académicos y las académicas regionales?

Tampoco se trata de exaltar el ecosistema académico de Lima, ya que, por lo general, los debates y discusiones están bastante desconectados del sustrato vivo del país y, más bien, estos seminarios y congresos se realizan en virtud de mantener

o recrear la disciplina y requerimientos de la cátedra. De hecho, la mayoría de académicos de estos espacios de élite consideran que la práctica científica dista de la participación política. Particularmente, aquellos que se ocupan de la cuestión política han adoptado una interpretación extrema de Max Weber, tomando al pie de la letra las prescripciones sobre la “neutralidad valorativa” del investigador. En consecuencia, han restringido sus intervenciones públicas a columnas periodísticas o han dejado de escribir ensayos fuera del auspicio editorial con el ánimo de “no pelearse con nadie” —salvo algunas excepciones—, ante el riesgo de perder legitimidad académica siempre que se gane visibilidad pública en virtud de su supuesta “neutralidad”.

Desde una mirada más personal, considero que el hecho de que los investigadores y las investigadoras no se involucren en el debate público excede al miedo a perder el financiamiento o a poner en entredicho su posición laboral: muchos de ellos han obtenido un nombramiento y tienen una posición de trabajo estable. Más que responder a una concepción particular sobre la vida académica, esta actitud parece estar más estrechamente vinculada a la posicionalidad desde la cual los investigadores abordan sus agendas de estudio. Esta diferencia se vuelve aún más evidente en un contexto donde enfoques como la investigación-acción, la investigación comprometida o similares han perdido terreno en el campo académico. En su lugar, han surgido corrientes centradas en la “reflexividad” que, si bien resultan valiosas, aún se encuentran en el proceso de construir un filo crítico comparable al de aquellas perspectivas más orientadas a la transformación social. Esta transición ha dejado un vacío en términos de compromiso político y ético con los sujetos y territorios investigados, lo que incide en el tipo de conocimiento que se produce y en su potencial de incidencia en la esfera pública.<sup>19</sup>

Tampoco se puede decir que los investigadores y las investigadoras de regiones están más comprometidos o comprometidas, pues con que se comprometan a investigar seriamente ya es mucho. Por esto mismo, es necesario impulsar el fortalecimiento de espacios académicos de investigación regionales que podrían tener impactos a mediano y largo plazo, tanto en cuanto a la calidad de las investigaciones regionales con líneas de investigación fortalecidas y con producciones de mayor calidad y visibilidad como para contribuir a una descentralización real del conocimiento. Es que hay que decirlo sin rodeos: junto a otras desigualdades estructurales, persiste un centralismo epistémico que no solo coloca nuestra academia en la periferia

---

19 Sería injusto afirmar que no se discute la forma en que las investigadoras y los investigadores se involucran con sus objetos de estudio. De hecho, atravesamos un momento de intensa reflexividad respecto a la posición del investigador o la investigadora frente a sus audiencias e interlocutores, a la violencia simbólica que puede ejercer, y a lo que hoy se entiende como retribución hacia las comunidades involucradas. Sin embargo, estas discusiones suelen desarrollarse bajo una lógica académica formalista —a veces preestablecida por los marcos institucionales—, orientada principalmente a satisfacer exigencias académicas, aun cuando los contextos actuales demandan respuestas que trasciendan lo puramente académico y se inscriban en una clave política y ética más amplia. Al respecto véase Piovani y Muñiz (2018).

del conocimiento global, sino que sitúa a los centros de formación y producción intelectual de las regiones en una suerte de “periferia de la periferia” que genera lo que podría entenderse como una suerte de “colonialismo interno” del conocimiento.

Dicho de otro modo, la reflexión sobre el rumbo de la sociedad peruana hoy, difícilmente se construye a partir de enfoques y preocupaciones territorialmente situadas; por el contrario, hay un desconocimiento profundo de la historia, dinámicas y configuraciones locales por parte de la *intelligentsia* centralista. Por ejemplo, las políticas económicas, urbanísticas o socioambientales suelen ser analizadas por académicos y académicas, y expertos y expertas desvinculados o desvinculadas de la heterogeneidad territorial que caracteriza al Perú. En este sentido, si cada territorio requiere políticas diferenciadas, el análisis crítico de dichas políticas y de su implementación debe considerar perspectivas construidas desde una vinculación directa y comprometida con la realidad específica de esos contextos, ya sea por residencia, experiencia o trabajo sostenido en el territorio.

Un ejemplo que ilustra esta dinámica se observa en el sector agroindustrial. Este importante rubro ha experimentado un crecimiento significativo que ha generado numerosos puestos de trabajo y ha dinamizado diversas cadenas de valor en varias regiones costeras. Sin embargo, este impacto, altamente valorado desde una perspectiva macroeconómica promovida por organismos internacionales y las principales escuelas de negocios, tiende a eclipsar dos debates tan pendientes como urgentes: (i) la situación precaria de la pequeña y mediana agricultura familiar y (ii) las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la agroexportación. Frente a ello, algunas organizaciones como el SEPIA, CEPES<sup>20</sup>, el Grupo Propuesta Ciudadana y CIPCA —todas afincadas en Lima, excepto la última— han intentado posicionar una agenda crítica sobre estos debates, pero su alcance es limitado y no han logrado contrarrestar la narrativa dominante respecto del “milagro” agroexportador. Además, en las propias regiones afectadas, lejos de proponer alternativas sostenibles, las exiguas comunidades académicas locales no consideran este problema como un objeto de investigación prioritario, lo que refleja una agenda académica dominada por lógicas centralistas y elitistas (además de neoliberales), alejadas de las preocupaciones territoriales específicas<sup>21</sup>.

---

20 Centro Peruano de Estudios Sociales.

21 Un ejemplo adicional que refleja esta dinámica es la expansión de la palma aceitera en la Amazonía peruana, particularmente en la región de San Martín. Este cultivo ha sido promovido como una oportunidad para el desarrollo económico regional y ha recibido apoyo del sector privado e incluso de la cooperación internacional. Sin embargo, estudios etnográficos recientes han mostrado que la expansión de la palma aceitera también se vincula con la emergencia de conflictos socioambientales, desplazamiento de comunidades y deforestación. A pesar de estos impactos, el análisis nacional y regional de estos ha sido limitado y las voces de las comunidades involucradas a menudo no se incorporan en las discusiones. Véase, Huamán y Palacios (2018).

## II. La politización como escapatoria al punitivismo

Hoy más que hace unas décadas, nuestras discusiones académicas suelen estar atravesadas por consideraciones éticas sobre los fenómenos que observamos o las personas con las que interactuamos en el trabajo de campo, en el laboratorio e incluso en el archivo. Esto es especialmente notorio en temas delicados vinculados a la violencia: ya sea la violencia subversiva, la violencia de género, aquella asociada a economías ilícitas o las múltiples formas de violencia ejercida desde el aparato estatal. Ante estos dilemas, es fundamental y casi irrenunciable recordar algo aparentemente sencillo: explicar un problema no significa justificarlo o hacer concesiones. Los estudios sobre la memoria de la violencia política en el Perú no persiguen legitimar los hechos ocurridos en las últimas décadas del siglo pasado. Al igual que el análisis de las causas estructurales de la violencia delincuencia no implica desestimar el compromiso con la defensa de la vida y la seguridad ciudadana —como suponen los entusiastas de las respuestas autoritarias que implican abandonar las instancias internacionales de Derechos Humanos.

Se trata más bien de apostar por explicaciones complejas con el potencial de desencadenar respuestas públicas más efectivas, ya que podrían combinar rigurosidad y responsabilidad ética, reforzando el compromiso de las ciencias sociales con las comunidades y territorios en donde se produce la experiencia formativa, así como la investigación. Y es que entender los engranajes, contextos y subjetivaciones que han dado lugar a estos fenómenos no solo es necesario para abordar sus causas profundas, sino que, además, permite generar estrategias más efectivas de intervención y prevención. Pero el potencial de las explicaciones rigurosas no se agota con aquello que en el lenguaje de la gestión pública se denomina “intervenciones”. Estas apuestas críticas politizan los problemas sociales, visibilizando aspectos estructurales e históricos que se pierden de vista cuando solo se abordan sus aspectos “epidérmicos”. En ese sentido, politizar significa dotar de contexto político y social a un problema en lugar de individualizar las responsabilidades y, en consecuencia, las respuestas públicas mediante el abordaje punitivista.

El problema del punitivismo radica justamente en su tendencia a simplificar dinámicas complejas en su afán de encontrar culpables —a modo de chivos expiatorios— y ofrecer soluciones inmediatas. Así, el punitivismo, en cuanto régimen moral, se rehúsa a entender los matices y contradicciones de la realidad social, ofreciendo lecturas simplistas que derivan en propuestas o acciones —que pueden ser leyes o agendas sociales— igualmente simplistas, al mismo tiempo que desprovistas de otro horizonte que la inmediatez.

En tal sentido, el abordaje punitivista —que no es más que una forma extrema de respuesta moralista— tiende a simplificar y caricaturizar las situaciones que pretende analizar, lo que termina por despolitizarlas. Sus propuestas terminan siendo contraproductivas; primero, porque no involucran a la comunidad y porque

el problema, lejos de devenir en un asunto público, permanece aislado, ya sea en el terreno blindado de los tecnócratas y las tecnócratas o en la arbitrariedad de algún autoritarismo de turno. En segundo lugar, el inmediatez punitivista generalmente escamotea las estructuras de poder y desigualdad que subyacen a problemas como el crimen organizado, la violencia del Estado, la violencia de género y los conflictos sociales, entre otros. No es casual que las élites económicas y políticas suelen proponer soluciones punitivistas, ya que ello les ofrece una doble utilidad: por un lado, permiten identificar o fabricar culpables para apaciguar a la opinión pública; y por otro, mantienen intacta la arquitectura del privilegio, la exclusión y la injusticia de la que se benefician directamente. En consecuencia, este abordaje no solo es inconsistente, sino, al mismo tiempo, insostenible y no tiene otro efecto que profundizar las crisis.

En contraposición a la mirada punitivista<sup>22</sup>, una perspectiva politizada o de politización implicaría un acercamiento crítico *ad hoc*, reconociendo y desenredando las relaciones de poder, desigualdad e injusticia, así como las agencias individuales y grupales involucradas en encuadres específicos en los que tienen lugar nuestros problemas, algo que bien Norbert Elías (2008) podría llamar el desentrañamiento de las figuraciones.

Tomemos como ejemplo el caso de la minería artesanal en Madre de Dios. Una parte importante de los mineros y las mineras artesanales que hoy operan allí provienen de regiones andinas profundamente afectadas por la violencia política y la pobreza extrema durante los años noventa. Para muchos de ellos, la minería artesanal fue —y sigue siendo— una ventana de oportunidad para escapar de un destino marcado por la exclusión. A partir de esa cuestionada actividad, emergen incontables historias de éxito. Muchas de estas historias involucran a hijos e hijas que se convierten en los primeros profesionales de sus familias, abriendo nuevas posibilidades para las generaciones futuras. También hay comunidades que han logrado construir su autonomía económica, desafiando las barreras del racismo estructural y el aislamiento social en un país tan marcadamente desigual como el Perú. Estas comunidades, además, han desarrollado mecanismos de autogestión para acceder, por sus propios medios, a servicios básicos en territorios donde la cobertura estatal en salud y educación es prácticamente inexistente.

En ese sentido, resulta sencillo y hasta casi cínico enunciar el discurso de la “erradicación” de la minería<sup>23</sup> sin tomar en cuenta el entramado económico, social

---

22 Que en realidad es una entre muchas otras formas de examinar los problemas sociales, pues también las hay positivistas que pretenden llevar una supuesta objetividad aséptica a su paroxismo y también posmodernas que renuncian a las grandes explicaciones en virtud de los pequeños relatos.

23 El lenguaje asociado a la erradicación de la minería informal e ilegal en el Perú suele referirse a operativos de interdicción, programas de formalización minera y promoción de economías alternativas. No obstante, la estrategia de erradicación basada en interdicciones ha derivado en

y simbólico que hay detrás de la minería artesanal (que usualmente cae en el saco de lo “ilegal”). Este no es en modo alguno un sector homogéneo, pues hay actores grandes, medianos y pequeños. No todos los mineros artesanales están involucrados en redes de trata de personas. No todos utilizan insumos químicos de alto impacto ambiental. Y, lo más importante, no todos rechazan la fiscalización ni se oponen al control o a la progresiva formalización que alienta el Estado. Por el contrario, una proporción significativa busca el reconocimiento legal de su actividad y desea integrarse a las dinámicas económicas y políticas legítimas. Detrás de un problema tan complejo como este, no solo hay “culpables y víctimas inocentes” —como un análisis maniqueo podría suponer—: también hay circunstancias ambivalentes, efectos no buscados y coyunturas históricas que merecen ser comprendidas en toda su amplitud antes que juzgadas desde el distanciamiento burocrático del Estado debilitado o de la cooperación internacional de base ciudadana.

Frente a este complejo panorama, la agenda punitivista tiende a enfocarse únicamente en la superficie de la cadena de valor. Su mirada se limita al impacto macroeconómico y medioambiental de la informalidad o ilegalidad, reduciendo el análisis a los pasivos tributarios y ambientales generados por estas actividades. No obstante, este enfoque resulta problemático en un país con una débil capacidad de control estatal y, sobre todo, con una notoria indulgencia hacia los grandes evasores tributarios, muchos de los cuales también producen una huella ambiental significativamente lesiva.

Además, la agenda punitivista resalta los vínculos entre la minería informal y las economías criminales, en un contexto nacional en el que las regiones costeras del país, como la capital y la costa norte —que no tienen ninguna relación con la minería informal— se ven asoladas por una crisis de extorsión y crimen organizado. Esta visión, además, favorece una lectura dicotómica en la que los “buenos” son las comunidades nativas, retratadas como defensoras del territorio y la vida, mientras que los “malos” son los colonos, presentados como individuos viles, motivados solo por la codicia y la acumulación de capital, cuando la realidad es mucho más compleja. En lugares como Madre de Dios, y en otras regiones del país, las comunidades nativas y originarias también participan activamente en la minería artesanal, desafiando las categorizaciones rígidas y reduccionistas. Al hacerlo, muestran que la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que esta visión dicotómica sugiere. En lugar de adoptar posturas de moralismo punitivo, es necesario un enfoque que entienda las dinámicas económicas, sociales y culturales detrás de estas actividades y busque soluciones que reconozcan los derechos, las necesidades y las realidades de las comunidades involucradas. No se trata de quién contamina menos —o más—

---

operativos armados en zonas habitadas por población civil, incluyendo mujeres y niños. Un ejemplo de ello, ocurrió en 2015 durante la interdicción en el distrito de Huepetuhe, donde se llegó incluso a bombardear parte del tejido urbano.

porque la contaminación nos afecta a todos; se trata, más bien, de cómo afrontamos el problema mirando todas las aristas y buscando soluciones razonables en lugar de solo señalar a los sospechosos o sospechosas habituales.

Frente a estas tensiones que demandan un enfoque de politización, es esencial recuperar prácticas de investigación-acción y de coproducción de conocimiento que vayan más allá de las llamadas “retribuciones” y que superen las formas de extractivismo académico en las que todos estamos involucrados. Se trata de desarrollar enfoques que acompañen los procesos populares y a las organizaciones sociales en sus preocupaciones, favoreciendo un conocimiento contextualizado y comprometido con nuestro tiempo y sus desafíos.

## Conclusiones

Este ensayo ha intentado plantear algunas preguntas e hipótesis en lugar de ofrecer respuestas contundentes y definitivas sobre dos problemas conocidos y silenciados en las ciencias sociales peruanas: el centralismo y la ausencia de una crítica al enfoque punitivista.

En primer lugar, he evidenciado las dinámicas de centro periferia que se reproducen en las ciencias sociales peruanas y que presumo que deben extenderse a la mayoría de disciplinas si es que no a todas. Y es que, mientras que en Lima existen universidades y centros de investigación que han consolidado institutos de investigación interdisciplinarios y políticas institucionales de fomento de la formación e investigación científica, en la amplia mayoría de universidades regionales, la investigación sigue siendo un esfuerzo individual y desarticulado sin apoyo técnico ni financiero sostenido. Sin embargo, las causas de esta disparidad no pueden explicarse únicamente por los efectos de los ajustes estructurales y el debilitamiento de la universidad pública iniciados en los años noventa, sino, sobre todo, por dinámicas institucionales internas. Las universidades se han convertido en arenas políticas donde actores patrimonialistas, ajenos a la práctica investigativa, compiten por recursos y posiciones de poder. Y si no actuamos colectivamente desde una lógica descentralizada —fortaleciendo espacios alternativos de investigación y/o reestructurando nuestras universidades—, será imposible fortalecer nuestras sociedades civiles ni generar respuestas basadas en la evidencia y territorialmente situadas.

Por otro lado, planteo una crítica al enfoque punitivista en el análisis y abordaje de problemáticas sociales complejas, especialmente aquellas vinculadas a la violencia y la informalidad, usando para defender mi argumento el caso de la minería artesanal. Mi punto de partida es que las ciencias sociales deben apostar por explicaciones rigurosas y éticamente responsables que politicen los problemas, es decir, que los contextualicen históricamente y reconozcan las estructuras de poder

e injusticia subyacentes. En contraste, el punitivismo simplifica estas dinámicas al reducirlas a culpables individuales y soluciones inmediatas, despolitizando los conflictos y dejando intactas las raíces estructurales de la exclusión, que afectan principalmente a los actores subalternos. Desde mi perspectiva, la mirada punitiva ignora estas complejidades y perpetúa una narrativa dicotómica entre “buenos” y “malos” sin atender a las realidades mixtas y ambivalentes que atraviesan a las comunidades involucradas, sobre todo, cuando de por medio está la subsistencia y las gestas colectivas por autonomía económica y empoderamiento político en medio de la desigualdad y el autoritarismo.

## Bibliografía

ANSIÓN, J.

1992 “Acerca de un irritante debate entre antropólogos del norte: Comentarios al artículo de O. Starn”. *Allpanchis*, vol. 24, n.º 39, 113-122, (<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8462365>).

DEGREGORI, C. I.

2013 *Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú. 1980-1999*. Lima: IEP.

DEGREGORI, C. I. y P. SANDOVAL

2009 *Antropología y antropólogos en el Perú: La comunidad académica de ciencias sociales bajo la modernización neoliberal*. Lima: IEP.

ELÍAS, N.

2008 *Sociología fundamental*. Barcelona: Gedisa.

HUAMÁN, A., y D. PALACIOS

2018 “Agro-industria en la Amazonía Colonizada: Una aproximación etnográfica a la cadena de valor de la palma aceitera en Tocache, San Martín”. En *Perú: El problema agrario en debate* (SEPIA XVII). Lima: SEPIA, pp. 173-232.

MANRIQUE, A. (ed.)

2022 *Las ciencias sociales en el Perú y la sociedad del siglo XXI. Demanda formativa y agenda de investigación*. Lima: CONCYTEC.

PIOVANI, J. I., y L. MUÑOZ (eds.)

2018 *¿Condenados a la reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de investigación social*. Buenos Aires: CLACSO.

REÁTEGUI, F., J. CIURLIZZA y A. PERALTA

2008 *Hatun Willakuy. Comisión de la Verdad y Reconciliación*. IDEHPUCP. <https://www.cverdad.org.pe/ifinal/>